

nómico. No es ningún secreto para nadie que desde diversas posiciones se ha tratado de desatar un clima "lerrouxista" con fines electorales en Cataluña desde que la convocatoria a las urnas existió como posibilidad en el horizonte político. Todos los intentos hasta el momento lograron ser desbaratados con la ayuda, incluso, de andaluces como Felipe González o el comunista Fernando Soto. Cabe pensar que Alejandro Rojas Marcos habrá valorado concienzudamente cuál es la real situación política del país y cuál debe ser su aportación a una solución progresista. Pero el peligro está ahora precisamente en que, más que una campaña lerrouxista con fines electorales, los motivos de desacuerdo con que ha sorprendido a Cataluña y al País Vasco Rojas Marcos sean utilizados, contra su voluntad, con miras al debilitamiento de las posiciones catalanas y vascas frente al poder central.

Entre tanto, reaparecerá al final de esta semana el presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, en Madrid, quien se ha resistido a aceptar la invitación del Gobierno en días pasados y ahora tomará la carretera de Madrid por su cuenta y con todo riesgo. Para Tarradellas las cosas van mal en España. Suárez comete errores graves y es necesario "un golpe de timón" para salir del difícil momento.

Estamos en la última etapa de la transición que separa la dictadura y un Estado democrático descentralizado respetuoso de las voluntades nacionales. Del mal estado de la mar, se tiene en estos días ambigua noticia si quiera sea a través de la decisión del Gobierno de investigar los rumores existentes en el ámbito castrense. De golpes de remo desafortunados que sólo crean confusión en momentos tan delicados, no faltan tampoco ejemplos. De la desorientación en el rumbo a seguir, parece informar la necesidad de un "golpe de timón". Y no falta quien quiere virar ciento ochenta grados y regresar al punto de partida o hundir el barco en último extremo antes que llegar al objetivo fijado. Todo eso sucede a bordo en estos decisivos días del final de travesía. ■ M. C. V.



La Gestora del PSOE y los grupos parlamentarios socialistas estudian los problemas autonómicos.

LA BATALLA DEL VERANO

FERNANDO LOPEZ AGUDIN

A CABAMOS de entrar en el verano que, sin duda, será la más decisiva de las pocas estaciones veraniegas democráticas que hemos conocido en los últimos tiempos. Es todo un síntoma de la profunda crisis por la que atraviesa el país el hecho de que cada estío es más intranquilo que el anterior y más tranquilo que el posterior. De momento el Congreso de los Diputados ha suspendido las vacaciones de julio en espera de que la realidad acabe también suspendiendo el descanso de agosto. Este es ya el sexto verano en que la política no veranea.

Dos estatutos, el de autonomía de las nacionalidades y el de los trabajadores, van a ser los ejes de estos largos y cálidos sesenta días; al final de los cuales sabremos no sólo el destino final de estos textos, sino, lo que es esencial, el tipo de salida política que va a tener el actual "impasse" gubernamental. El estatuto de Euskadi y Cataluña, acompañado de la ley sobre financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgá-

nica para la creación de policías por dichas entidades (previstas por el programa legislativo del Gobierno para el mes de julio); y el Estatuto del Trabajador, unido a la ley de Regulación de la Huelga (fijada por el citado calendario para el mes de agosto) junto con las vicisitudes de un patrimonio sindical pendiente de devolución a las centrales sindicales, van a ser los dos principales frentes de lo que se puede denominar, sin ningún tipo de énfasis, como la batalla de verano.

Batalla que se inscribe perfectamente en el amplio marco de la ofensiva involucionista de los sectores reaccionarios de Unión de Centro Democrático por imponer un tipo de salida portuguesa que acabe congelando no sólo los mencionados estatutos, sino todo el proceso democrático en su conjunto. Ambos estatutos, sobre todo el referente a la problemática autonómica, son la espoleta con que la derecha franquista, presente dentro y fuera del partido gubernamental y del mismo Gobierno, pretende imponernos

un "Nobre da Costa o Mota Pinto" en el palacio de la Moncloa. Es decir, el verano va a ser el "test" político para saber qué tipo de hojas van a caer en el próximo otoño: las involucionistas, barridas por los jardineros democráticos coaligados; o las democráticas, aplastadas por los jardineros "portugueses".

Dos estatutos democráticos

El haremos para medir esta prueba política será cotejar los Estatutos de Guernica y de CC. OO. (presentado por el grupo parlamentario comunista) con los que finalmente acaben aprobándose en el Congreso de los Diputados. El número de variaciones o correcciones, más cualitativas que cuantitativas, que se introduzcan en estos dos textos y el tipo de votación (UCD junto con los neofranquistas de CD, o UCD al lado de los grupos democráticos nacionalistas o de izquierda) serán el indicio imprescindible para saber qué sector del partido gubernamental va a ganar en

Estatutos

este duro forcejeo entre los inmovilistas y los democráticos.

Aunque el comienzo de una negociación no es indicativo nunca de las auténticas posturas de ninguna fuerza negociadora, sí hay que resaltar que de entrada es el sector reaccionario de UCD quien va ganando en esta dramática carrera contra reloj de sol. La elaboración de los desacuerdos del Gobierno con el Estatuto de Guernica, en lugar de empezar a fijar los acuerdos, y la elaboración de un contra-estatuto de los trabajadores que no es más que un "pupurrí" de la legislación laboral franquista corregida y empeorada, es un dato lo suficientemente alarmante sin ser todavía definitivo.

Sea una línea estratégica, hegemonía de la tendencia "portuguesa" de UCD; sea una línea táctica, predominio del ala moderada; o sea ambas cosas, puesto que la división del partido gubernamental en estos dos cruciales temas es abismal, no deja de ser un pésimo prólogo político. Entrar en el verano poniendo en cuestión el "estatuto de mínimos" de los vascos o ignorando el papel de las secciones sindicales en las empresas es el camino más corto y derecho para entrar en el otoño cuestionándose la función del Parlamento, de los partidos, o de las centrales sindicales.

Empezar a dejar fuera del marco democrático y constitucional a los vascos y catalanes, amén de la clase trabajadora, es apostar —tanto en una postura como en otra— muy fuerte por la radicalización de la atmósfera social y laboral con el objetivo de provocar el estallido de una grave crisis o de una aparente grave crisis con el fin de imponer la salida portuguesa o el gobierno de coalición. Ganar tiempo y dejar que se deteriore la situación hasta un cierto grado (sector moderado) o totalmente (sector involucionista) puede ser el objetivo común de estas dos auténticas provocaciones a dos estatutos democráticos.

UCD: "juristas 'versus' políticos"

Aunque, más posiblemente, refleje también una cierta tregua o compás de espera por parte de los dos sectores en pugna en el interior de UCD. Los "políticos, partidarios de pactar con las fuerzas democráticas, no objetarían inicialmente el texto duro —de cara a la negociación— de los "juristas", partidarios de enredar y complicar la situación con sutilezas jurídicas que impidiesen técnicamente la formulación de un amplio acuerdo democrático".

Por ahora, unos y otros calculan la capacidad de respuesta de las fuerzas democráticas a las que, una vez más en este muy largo proceso de transición, pretenden amedrentar con el fantasma

tatuto de las autonomías y de los trabajadores no es ninguna democracia.

De ahí que paulatinamente, en la medida que vaya desarrollándose la lucha, se irán decantando progresivamente las posiciones de los "juristas" y de los "políticos" de UCD. Porque en el fondo de estos dos planteamientos está el apagar o no la mecha de la dinamita que puede hacer saltar la democracia por los aires. Reconocer o no los derechos de los vascos o los catalanes, y de los trabajadores, es una decisiva cuestión política para el sistema democrático.

Quienes mejor lo saben son los denominados "juristas". Frustrados por el fracaso de la política de centro derecha, gravemente inquietados por lo que hay de oculto y no transparente en la polémica



Felipe González y Txiki Benegas, del PSOE de Euskadi, parecen preocupados. (Foto: RAMON RODRIGUEZ.)

del golpismo o del intervencionismo de algún aparato de Estado. Este chantaje, que es un verdadero insulto a históricas y respetables instituciones estatales, es hoy frecuentemente utilizado por los portavoces periodísticos gubernamentales. Aunque, hay que señalarlo, sin ningún resultado. No es sólo que las fuerzas democráticas están ya escarmentadas de este tipo de amenazas, sino que una democracia sin un auténtico es-

terna socialista acerca del marxismo, angustiados por un sindicalismo democrático, temerosos de un gobierno de centro izquierda que creían enterrado para siempre a través de una lectura triunfalista de los resultados electorales del primero de marzo, pretenden claramente crispar la situación para proponer abiertamente una fórmula excepcional de gobierno al margen del Parlamento y de los partidos. La interpretación rí-

gida y al pie de la letra del texto constitucional es hoy el mejor camino anticonstitucional.

Muy distinta es la actitud de los "políticos" que, a través de una interpretación política de la Constitución, pretenden establecer puentes con una parte sustancial de la izquierda. Aproximar los puntos de vista centrista y socialista es a la vez el camino más idóneo para llegar a un acuerdo de legislatura o a la formación de un gobierno de coalición. Para este sector lo prioritario no es unir a los vascos en una respuesta democrática, sino dividirlos internamente mediante la potenciación de un PNV; ni reforzar la unión entre socialistas y comunistas, sino congelarla o empezar a intentar romperla como ocurre en ese laboratorio de ensayo que es la realidad catalana; ni ignorar las secciones sindicales, sino apoyar el sindicalismo de servicios que se quiere atribuir a UGT frente al sindicalismo de rechazo que se atribuye a CC. OO. (Publius: "ABC", 15 de junio), y, por supuesto, la salida global no consiste en dar marcha atrás, sino en ir hacia adelante de la mano de los socialistas.

Sin embargo, los "políticos" entran en este combate con un grave handicap: su división interna tanto en lo que se refiere al contenido de esa nueva política de coalición con un sector de la izquierda como en lo que concierne al protagonismo personal de la "nueva frontera" de UCD. La lucha por sustituir o mantener a Adolfo Suárez puede llevar a la tentación irresponsable de intentar también tensar la cuerda para conseguir que una comisión regia se haga cargo del problema al margen del Gobierno, del Parlamento y de los partidos políticos. De hecho se daría el primer paso hacia la sustitución del presidente de gobierno en beneficio de alguna personalidad concreta de esa comisión regia que tienen "in mente".

No obstante, parece sensato esperar que esta contradic-



El paro, uno de los más graves problemas del país, se plantea con especial intensidad en Andalucía. En la foto, manifestación de CC. OO. y UGT en Málaga.

ción secundaria no acabe convirtiéndose en antagónica en este sector. La fórmula de la comisión regia, de verificarse en la práctica, muy rápidamente se transformaría en el inicio de la salida portuguesa de los "juristas": en muy poco tiempo, o casi simultáneamente a su victoria, la santa alianza del desacuerdo —extrema derecha, derecha neofranquista y reaccionarios de UCD— rentabilizaría la defenestración de Adolfo Suárez. Así que quienes apuestan por colocar a otro hombre en el palacio de la Moncloa, desde la perspectiva de la derecha democrática, deberán posponer sus objetivos para no hacerlos coincidir con el objetivo involucionista.

Tres índices de medición

Esto es lo que subyace en el fondo de esta batalla del verano. Porque la raíz de la crisis no se encuentra única y limitadamente en estos dos estatutos, sino en la perspectiva

global y general del proceso: hay que optar por uno de estos dos proyectos que ofrecen los "juristas" o los "políticos". De ahí la importancia del resultado de esta lucha veraniega al ser un auténtico índice de medición de cara al otoño.

Una victoria "jurista" sería el fin de la democracia. Al menos a corto plazo. La resolución democrática de estos dos problemas crearía rápidamente las condiciones para la "portugalización" de nuestro país. Objetivo que anhela la fracción franquista de la derecha que se había sumado a la reforma política con el sueño de poder controlarla o graduarla hasta cierto límite.

En caso de empate entre estas dos fuerzas, la "jurista" involucionista o la "política" democrática, el sector moderado del partido gubernamental lograría imponer su salida con la colaboración de los socialistas, que correrían solícitos en su ayuda. La famosa "cláusula de salvaguardia", que guarda Felipe González en su bolsillo derecho, sería el salvavidas de esta

fracción de la derecha en un doble sentido: ante la amenaza "jurista" y ante el peligro que significa para ella tener que defenderse con una política de unidad democrática. Incluso no cabe descartarse la posibilidad de que los políticos de UCD fueren un aparente empate para que el coste del no menos aparente desbloqueo por parte de los socialistas fuese el mínimo posible. Porque para esta tendencia lo esencial no es imponer una salida democrática, sino imponer un determinado tipo de salida democrática en las perspectivas de los involucionistas.

La victoria de los "políticos" sería la superación de un grave bache sin por tanto solucionar los problemas. Lo que supondría en los próximos meses una nueva batalla de invierno o de primavera —en base a cualquiera de las leyes orgánicas más conflictivas pendientes de discusión y elaboración— con los ahora derrotados. La situación política es tan compleja y delicada, llena de mil problemáticas, que la guerra contra los

"portugueses" de UCD sólo podría acabar con la elaboración de una política y de un gobierno de amplia mayoría social y representación parlamentaria.

Pero una victoria de este tipo, al poder únicamente lograrse a través de un acuerdo con las fuerzas democráticas, muy probablemente sería también el primer paso hacia alguna fórmula de compromiso, con o sin representación gubernamental, entre los centristas y los socialistas. Porque la proximidad o el alejamiento de sus posiciones en torno a esta batalla del verano prefigura o no otro tipo de relaciones entre el PSOE y la UCD. Y en el trasfondo de todo, esto es lo que realmente se dilucida: para un sector de UCD, la defenestración de Marx es ya toda una garantía, y para el resto no es suficiente. Aunque el problema está en que si el PSOE arroja-se por la ventana la "O" o la "S", tampoco estarían satisfechos. Ya que para los "juristas" de UCD lo que sobra es la "P" de partidos. ■ F. L. A. (Fotos: EUROPA PRESS.)